

Editorial

La gran unidad

Las movilizaciones sindicales y populares en marcha deben servir de acicate a la unidad por la paz y la democracia

El lunes 6 de septiembre pasado, con la presencia del Senador Carlos Gaviria Díaz y otros parlamentarios del Frente Social y Político y Alternativa Democrática, de Jaime Caycedo, Secretario General del Partido Comunista Colombiano y directivos de la CUT nacional y departamental, se realizó una importante y concurrida reunión de la Gran Coalición Democrática en Medellín, que rebasó todas las expectativas por la masiva participación de sindicalistas, activistas populares, profesionales y otros destacamentos progresistas.

Es una grata experiencia que debe ser imitada en otras capitales y ciudades del país. Los actuales son momentos de unidad y de respuesta popular frente a la ofensiva uribista, que busca apuntalar la guerra y descargar todo el peso de la crisis económica y social del país en los hombros del pueblo colombiano.

Las movilizaciones sindicales y populares en marcha, como la jornada del 16 de septiembre y el Paro Nacional del 12 de octubre, deben servir de acicate para la unidad más amplia de los colombianos, contra la nefasta política gubernamental y el reeleccionismo uribista.

La caída del estatuto antiterrorista, las iniciativas en pro del acuerdo humanitario y el creciente descontento del pueblo con la política oficial, son demostraciones palpables de que el presidente Uribe Vélez es vulnerable y no es la especie de Superman invencible como lo quieren mostrar la publicidad del régimen, la "gran prensa" y las manidas encuestas.

Las fuerzas de izquierda y democráticas deben encontrar el camino de la unidad para forjar una alternativa viable y programática, cuya base sea la democracia avanzada y la defensa de la soberanía nacional, más allá de la coyuntura electoral, muy importante por cierto ante las pretensiones reeleccionistas, pero no el único desafío de las fuerzas populares.

Preguntas que tienen respuestas

La captura de tres militares por la muerte de los sindicalistas en Saravena (Arauca), pone el dedo en la llaga del terrorismo de Estado. Al contrario de lo que dijeron el Vicepresidente Francisco Santos, los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, Carlos Alberto Ospina y Martín Carreño y los oficiales de la XVIII Brigada, quedó demostrado que no existió ningún combate y que Eduardo Prieto Chapucero, Leonel Goyeneche y Héctor Alirio Martínez, directivos sindicales de la región, fueron fusilados sin fórmula de juicio y en total estado de indefensión.

¿Quién responderá ahora por esos viles asesinatos? ¿Sólo los militares de bajo rango, ahora enjuiciados como autores materiales? ¿Qué pasará con los autores intelectuales, los que desde las alturas del poder han creado el clima de confrontación y del concepto del "enemigo interno" y que aplicaron el "estatuto antiterrorista" sin estar vigente? ¿Qué responsabilidad tienen el Vicepresidente Santos y los altos mandos militares que salieron a proteger a los autores materiales del fusilamiento de personas inermes? Son preguntas que deben tener respuestas. ¡Y claro que las hay!. *voz